

La prescripción de la acción social de responsabilidad contra directivos de Clubes deportivos en Catalunya: Especial referencia al F.C. BARCELONA

Por José Antonio VIVANCO HIDALGO

I-. Introducción.

En la actualidad, y gracias a los medios de comunicación y al grado de complejidad del tejido social asociativo, las consecuencias jurídicas tanto de los eventos deportivos de cualquier tipo, campeonatos, relaciones entre federaciones y ligas con sus asociados y viceversa, así como de las propias entidades deportivas, se desarrollan a una velocidad de vértigo.

Como ejemplo de la complejidad de las relaciones de gobierno de los clubes deportivos, y la velocidad de vértigo con que se suceden las noticias relacionadas con los mismos, tenemos la reciente aprobación del acuerdo del ejercicio ante los Juzgados y Tribunales de Justicia de la acción social de responsabilidad contra los ex directivos del F. C. Barcelona por las deudas generadas durante su gestión.

El presente artículo versará sobre la naturaleza jurídica de dicha acción social de responsabilidad y el plazo de prescripción para su ejercicio en el territorio catalán, intentando así dar un algo de luz, modestamente, a tan complejo tema.

II-. Naturaleza jurídica de la acción social de responsabilidad contra los directivos de clubes deportivos en Catalunya.

Tras la aprobación en la junta general de socios compromisarios del F. C. Barcelona, por mayoría simple (art. 27.5 de los Estatutos del F. C. Barcelona, con relación al artículo 322-17.2 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas -DOGC de 2 de mayo de 2008- en adelante, <u>Libro III del Código Civil de Cataluña</u>), del acuerdo para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los directivos salientes por las pérdidas generadas durante su periodo de gestión, y ante la novedad de dicha actuación, surgen varios interrogantes al respecto.



Entre ellos, y tras el último mandato de la directiva saliente, con dimisiones incluidas tras la moción de censura del 2008, se encuentra el alcance de la prescripción del ejercicio de dicha acción.

Para ello, es necesario analizar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de dicha acción social de responsabilidad.

De conformidad con el Artículo nº 1 de los vigentes Estatutos del F. C. Barcelona, ésta es

".... una <u>asociación deportiva privada catalana</u>, de personas físicas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, constituida el 29 de noviembre del año 1899."

Por otro lado, la Exposición de Motivos del Libro III del Código Civil de Cataluña dispone, en materia de Asociaciones, que

"El título II del libro tercero comprende el régimen jurídico privado de las asociaciones, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que ha entendido que las comunidades autónomas que han asumido competencias en esta materia están habilitadas para regular tanto el régimen interno de las asociaciones, es decir, la organización y el funcionamiento, como el régimen externo o de participación en el tráfico, con la condición de que no contradigan las normas básicas dictadas por el Estado (...) En el régimen de organización y funcionamiento de las asociaciones es novedad, siguiendo el criterio consolidado en otras personas jurídicas de estructura corporativa, la posibilidad de que la asamblea acuerde la convocatoria de una nueva reunión, el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno o la separación de estos de sus cargos. aunque estos puntos no constasen en el orden del día. Se precisan también algunas cuestiones relativas al derecho de voto, como la forma de ejercerlo cuando un asociado es menor de edad o se encuentra incapacitado o la posibilidad de hacerlo efectivo por delegación y por medios telemáticos siempre que los estatutos regulen el procedimiento de ejercicio. En cuanto al régimen de adopción de acuerdos, es destacable la exigencia de quórums de presencia o, alternativamente, de la consecución de una mayoría reforzada para modificar los estatutos y aprobar la transformación, fusión, escisión o disolución de la asociación si los estatutos no lo regulan específicamente."

De la lectura de la citada Exposición de Motivos, se extrae que la "novedad" se centra en acudir a otras instituciones existentes para incorporarlas, con los matices propios del Libro III del Código Civil de Cataluña, al régimen de organización y funcionamiento de las asociaciones. Dichas "personas jurídicas de estructura corporativa" que tienen expresamente reconocido el ejercicio de la acción social de responsabilidad son las sociedades capitalistas reguladas en la nueva Ley de Sociedades de Capital (antiguas Ley de Sociedades Anónimas,



Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y las reguladas en el Código de Comercio).

El artículo 322-17 del Libro III del Código Civil de Cataluña establece que

"Los miembros del órgano de gobierno responden de los daños que causen a la asociación **por incumplimiento de la ley** o de los estatutos o por actos u omisiones negligentes en el ejercicio de sus funciones."

A pesar de que comparto las reticencias o resistencias de algunos autores respecto de acudir analógicamente a la legislación mercantil para regular la responsabilidad de dichos directivos¹, no es menos cierto que precisamente el Libro III del Código Civil de Cataluña se refiere a ella. Sin entrar a valorar lo acertado o no de dicha incorporación, la Disposición Adicional 7ª.4² con relación a la Disposición Adicional 8ª³, ambas de la Ley del Deporte, dispone una responsabilidad objetiva de los directivos por las deudas del club, similar al actual artículo 367 Ley de Sociedades de Capital (antiguo 262.5 LSA y art. 105.5 LSRL), pero sin llegar a los extremos de tener que articular la disolución del Club o instar su concurso.

Para garantizar esas deudas, "antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, a favor del club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el 15% del presupuesto de gasto." ⁴

¹ Xavier Albert Canal Gomara: "La responsabilidad civil de directivos de clubes deportivos y consejeros de sociedades anónimas deportivas", en "Derecho Deportivo en línea", Boletín nº 13, abril-agosto 2009, pág. 28 y siguientes: "Otra cuestión a dilucidar es la extensión de la responsabilidad. El artículo 15 LODA señala que también serán sujetos responsables las demás personas que obran en nombre y representación de la asociación. En el ámbito de las sociedades, el artículo 133.2 de la LSA extiende al administrador de hecho el régimen de responsabilidad de los administradores inscritos. En sede de las asociaciones entender una interpretación analógica de la norma mercantil es cuestionable."

² "Los miembros de las Juntas Directivas de estos clubes responderán mancomunadamente de los resultados económicos negativos que se generen durante el período de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo en cuenta las salvedades de las auditorías."

³ "Los miembros de las Juntas Directivas de estos clubes responderán mancomunadamente de los resultados económicos negativos que se generen durante el período de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo en cuenta las salvedades de las auditorías."

⁴ D.A. 7^a.4 y D.A. 8^a de la Ley del Deporte.



La Disposición Adicional 3^a.5 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, considera resultados económicos positivos o negativos las variaciones positivas o negativas del patrimonio neto contable, no considerándose las que provengan de revalorización de activos.

Se les impone a los directivos la obligación de depositar, antes de iniciar cada ejercicio, a favor del club y ante la Liga profesional, un aval bancario que garantice su responsabilidad y que llegue al 15 % del presupuesto de gastos, presupuesto, que debe ser aprobado por la asamblea previo informe de la Liga profesional.

En aquel sentido, la **STS** (1^a) **de 15 de Julio de 1.997** (**RJ 1997, 5609**) señala que "la responsabilidad solidaria de los administradores con la sociedad por las deudas sociales (se configura) como una pena civil por la inactividad de aquéllos al no solicitar (sic) el acuerdo de la disolución de ésta en aquellos casos en que tal causa puede colocar a la entidad en una situación de insolvencia ante los acreedores". Se impone a los administradores una sanción consistente en que éstos asuman la responsabilidad por la deudas sociales por el incumplimiento del deber impuesto por los citados preceptos.

La STS (1ª) de 24 de septiembre de 2001 señala en su Fundamento de Derecho Primero que "la acción de responsabilidad que establece la Disposición Transitoria 3ª, apartado 3, de naturaleza ANÁLOGA a la recogida en el artículo 262.5, ambas normas de la LSA, acciones que no guardan relación alguna, en cuanto a sus presupuestos con la acción del art. 135 de la propia Ley. En este sentido dice la sentencia de esta Sala de 6 de noviembre de 1.999 que la exigencia de la responsabilidad solidaria a los administradores, que es una responsabilidad objetiva, es procedente ex lege (...) cuando hayan transcurrido los plazos a que se refieren los apartados anteriores de la mismas "sin haberse adoptado e inscrito las medidas en ellos previstas".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 18 de Septiembre de 1.996 (AC, 1996, 1792), dispone que

"Establece una auténtica sanción civil a los administradores que (...) es la de constituirlos en deudores solidarios entre sí de las deudas sociales, estableciendo una responsabilidad ex lege por deudas ajenas, y que es independiente, aunque puede concurrir, con la responsabilidad por daños (...). Se trata en consecuencia de una responsabilidad personal de los administradores, ilimitada en su cuantía (art. 1911 CC), comprensiva de todas las deudas sociales (...), solidaria entre los administradores, y que en modo alguno aparece subordinada a la insuficiencia patrimonial de la sociedad - aunque ésta se encuentre en su base -, de suerte que no tiene carácter subsidiario a la responsabilidad de ésta".

Así pues, la responsabilidad establecida en las citadas disposiciones tiene un carácter marcadamente objetivo: surge de modo automático y ope legis, sin la

concurrencia de otros requisitos. Se trata, por consiguiente, de una responsabilidad objetiva que no precisa de la concurrencia de culpa concreta de alguno de los administradores ni que exista nexo causal entre la actuación del directivo y la existencia de deudas o resultados negativos durante su gestión, de conformidad con las citadas Disposiciones Adicionales de la Ley del Deporte.

No obstante, para suavizar este tipo de responsabilidad, el apartado 6º del artículo 322-17 del Libro III del Código Civil de Cataluña dispone que

"Si la responsabilidad a que se refieren los apartados 1 a 5 no puede imputarse a una o más personas determinadas, responden todos los miembros del órgano salvo los siguientes:

- a) Los que se han opuesto al acuerdo y no han intervenido en su ejecución.
- b) Los que no han intervenido en la adopción ni en la ejecución del acuerdo, siempre y cuando hayan hecho todo lo que era posible para evitar el daño o al menos se hayan opuesto formalmente al saberlo."

III-. El plazo de prescripción de la acción social de responsabilidad contra directivos de clubes deportivos en Catalunya.

Llegados a este punto, debemos preguntarnos, entre otras cuestiones, cuál es el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción social contra dichos directivos.

Siguiendo a Francisco Rivero Hernández⁵, "en el nuevo régimen legal, la prescripción queda relacionada directamente con el retraso (objetivo) en el ejercicio de los derechos (cfr. sentencia de 12 de julio de 1985), en el sentido de «silencio de la relación jurídica» - de que ya hablaran GRAWEIN (1880) y ALASDE BUEN-RAMOS (1918)-, de acuerdo con cánones predeterminados (plazos, cómputo) y al margen, en términos generales, de la posición subjetiva de sus protagonistas, referida ésta tanto a la inactividad como a su causa; sin perjuicio, en este último aspecto, de atender a alguna situación personal concreta (en el inicio del cómputo del plazo) o entendida como excepción o como motivo de suspensión de los plazos pertinentes. Sensible el legislador catalán a las corrientes imperantes en Derecho comparado de forma abrumadora -en un mundo y tráfico jurídico y económico con clara tendencia a la unificación internacional de las reglas sobre contratación y prescripción (Convención de Viena, Uniform Commercial Law norteamericano, Principios del Derecho Contractual Europeo, ...)-, converge este régimen de la prescripción con aquellos criterios en cuanto a estas importantes cuestiones:

5

⁵ "Primera valoración de la regulación de la prescripción y la caducidad en el Código Civil de Cataluña", en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 678, Julio-Agosto 2003, págs. 2099-2167.

considerable acortamiento de los plazos prescriptivos, unificación creciente de los plazos (frente a una amplísima variedad y casuística anterior), y generalización del criterio del conocimiento o cognoscibilidad de los datos que configuran la pretensión en el cómputo de los plazos."

Teniendo en cuenta la opinión inicial de otros autores⁶, entiendo que el debate en la actualidad está zanjado desde la vigencia del Libro III del Código Civil de Cataluña por el que se establece un plazo específico de prescripción de la acción.

La primera Ley del Código Civil de Catalunya (Ley 29/2002, de 30 de diciembre) significó, entre otros, una nueva regulación (título II del libro primero) de los plazos de la prescripción, que según los artículos 121-20, 21 y 22 quedan fijados en diez, tres y un año, respectivamente, no pudiéndose acudir a los plazos de prescripción del Código Civil o del derecho común⁷.

Podría pensarse que, no habiendo plazo de prescripción establecido expresamente en dichos artículos para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los directivos de clubes deportivos, se aplicaría el plazo general de prescripción de diez años, a contar desde el cese del cargo del directivo, por lo que en el presente caso, se incluirían a todos los directivos de la primera junta presidida por Joan Laporta, inclusive el actual presidente del F. C. Barcelona, Sandro Rosell.

Sin embargo, debemos observar lo que dispone el artículo 121-20 in fine del mencionado Libro Primero del Código Civil de Cataluña:

⁶ Xavier Albert Canal Gomara, y los que cita: "La responsabilidad civil de directivos de clubes deportivos y consejeros de sociedades anónimas deportivas", en "Derecho Deportivo en línea", Boletín nº 13, abril-agosto 2009, pág. 28 y siguientes: "Por lo que refiere al plazo para interponer la acción, la ley no dice nada. Una cosa es que limite la exigibilidad del aval, pero esto no se ha de entender como el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad. Ésta deberá regirse por las normas generales de la materia, sin que podamos alargar por analogía el régimen de responsabilidad de los administradores. Por aplicación del artículo 1964 del CC, el plazo será de 15 años. A pesar de esto, hay quién considera de aplicación el artículo 949 del Coco, y seria, por tanto, de cuatro años, eso sí, la garantía de los avales se habrá extinguido."

⁷ Antoni Jordà Fernández, "Notas sobre los plazos de prescripción en el derecho histórico catalán", en La Notaría, nº 9-10/2003, Septiembre 2003, págs. 217-224: "En Catalunya, y con relación al orden de prelación de fuentes, al aplicarse preferentemente los Usatges, las Constitucions y las costumbres locales sobre el Derecho canónico y el Derecho romano, quedaba vedada totalmente la presencia de los plazos de la prescripción justinianea y en cambio se afianzarán los de la tradición teodosiana, que eran precisamente los que se habían recogido en los Usatges. En cambio, en otros reinos peninsulares, como la Corona de Castilla, bajo una clara influencia del ius commune, se abandonó rápidamente el Liber y la tradición teodosiana, aplicándose los plazos de la prescripción justinianea de los diez y veinte años a los bienes inmuebles. Y esta regulación es la que posteriormente se trasladaría al Código civil español."

"Las pretensiones de cualquier clase prescriben a los diez años, <u>a menos</u> <u>que</u> alguien haya adquirido antes el derecho por usucapión o que <u>el</u> <u>presente Código o las leyes especiales dispongan otra cosa</u>".

Pues bien, el apartado cuarto del artículo 322-17 del Libro III del Código Civil de Cataluña, establece **expresamente** el plazo de prescripción para el ejercicio de esta acción:

"La acción de responsabilidad en interés de la asociación prescribe a los tres años de la fecha en que los responsables cesan en el cargo."

Y ello con independencia del periodo de gestión: el cómputo de los tres años de prescripción se inicia desde el cese en el cargo; y para los directivos dimisionarios en el 2008, de fecha a fecha hasta completar dicho plazo en el 2011, por su gestión hasta la fecha de dimisión (artículo 121-23.4 del Libro Primero del Código Civil de Cataluña).

Entiendo que este breve plazo de prescripción se adecua más al espíritu y finalidad del Libro III del Código Civil de Cataluña, dotando a las asociaciones deportivas de Cataluña, un mecanismo de solicitud de responsabilidades contra sus directivos ágil y rápido, permitiendo que el grado de conflictividad que pueda generarse dentro de la asociación no afecte a la marcha de la misma⁸.

Salvo mejor criterio.

José A. Vivanco Hidalgo Abogado.

- © José Antonio VIVANCO HIDALGO (Autor)
- © Iusport (Editor)

www.iusport.es

_

⁸ A diferencia del artículo 15 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, 1/2002, de 22 de marzo, que no dispone ningún plazo de prescripción para el ejercicio de una posible acción social de responsabilidad.